

APORTES FRENTEAMPLISTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO

1. Posicionamiento político del FA

El Frente Amplio desarrolla su acción política sobre la base de un concepto de “oposición responsable” que, a la vez que plantea defender los avances económicos, sociales, institucionales y en la agenda de derechos, cruciales durante sus gobiernos, le “tiende la mano” al gobierno para enfrentar las consecuencias de la pandemia y se manifiesta favorable a alcanzar los acuerdos nacionales necesarios para enfrentar los grandes desafíos de una época de grandes cambios.

El 2021 es un año crucial. Es necesario apoyar decisivamente a los sectores sociales y económicos más golpeados y más vulnerables, y concretar el camino de la recuperación económica. De lo contrario, las consecuencias negativas sobre el tejido productivo y social permanecerán en el tiempo, aún superada sanitariamente la pandemia. Pero, además, el 2021 es crucial para enfrentar las iniciativas y las políticas más regresivas del gobierno, aquellas que le dan la espalda a las mejores tradiciones del país y a los logros alcanzados en los últimos 15 años.

El país debe, principalmente, mirar hacia adelante, son grandes los desafíos que se enfrentan. La polarización no es el camino, y el FA tiende, nuevamente, la mano al gobierno para alcanzar los acuerdos necesarios, junto al conjunto de organizaciones sociales. El FA, como ha sido desde su creación, hace 50 años, acompaña y confía en la capacidad de propuesta y lucha del pueblo uruguayo.

2. Las fortalezas construidas por los gobiernos del FA permitieron enfrentar un evento tan inédito y brutal como la pandemia, las que el gobierno no supo aprovechar en su potencia.

Las fortalezas y transformaciones económicas, sociales e institucionales procesadas durante los 15 años de los gobiernos del FA permitieron, y aún permiten, que el actual gobierno tuviera un potente conjunto de instrumentos y capacidades para enfrentar la pandemia.

Sin duda la realidad hubiera sido otra, muy distinta, de no contarse con el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), el desarrollo de las capacidades científicas, la red de protección social, el Plan Ceibal, el desarrollo de la conectividad, el sistema de garantía (SIGA) y una potente credibilidad, confianza y espalda financiera, entre otras fortalezas. Una economía que, aún ante la debacle regional, transitó por el período de crecimiento más prolongado de la historia reciente, junto con una sociedad que experimentó progresos en sus condiciones de vida y un potente entramado de instituciones y organizaciones sociales que permitieron, junto con la conducta ejemplar de los ciudadanos y las ciudadanas, enfrentar la pandemia. Ese, y no otro, es el legado que dejó el FA.

El uso, o el deterioro, de estas capacidades y fortalezas es responsabilidad del gobierno. Dicho de otra forma, basta mirar lo sucedido en otras sociedades cuando la pandemia golpea en estructuras económicas debilitadas, cuando las arcas del Estado carecen de confianza y respaldo financiero, cuando los sistemas de protección social están debilitados y la informalidad campea, cuando las instituciones no tienen capacidad de respuesta y la ciudadanía desconfía de ellas, cuando las organizaciones sociales están debilitadas, cuando la sociedad está fragmentada y enfrentada en una estéril dinámica de polarización.

Asimismo, esas fortalezas, adecuadamente utilizadas, son las que permitirán un rápido despliegue del Plan de Vacunación, una vez resuelta la tan esperada llegada de las vacunas.

3. Insuficiente respuesta a la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas (¿Lo importante era la gente?)

La insuficiencia de la respuesta del gobierno ante la pandemia tiene como resultado una situación económica y social grave. Ello es aún más reprochable al constatar el muy acotado uso de las capacidades y fortalezas construidas durante los gobiernos del FA, lo que le hubieran permitido al gobierno dar apoyos económicos y sociales contundentes.

De hecho, los estudios, recomendaciones y los enfoques que provinieron tempranamente de una amplia gama de organismos internacionales y nacionales, y la forma en cómo reaccionó la gran mayoría de los Estados, deja aún más en evidencia la insuficiencia de la respuesta del gobierno.

¿A qué nos referimos cuando decimos que la respuesta fue insuficiente? Una muestra clara es el apoyo adicional que recibieron las familias más vulnerables durante la pandemia, a través de Asignaciones Familiares, de la Tarjeta Uruguay Social y de la Canasta MIDES, no llega a alcanzar los 500 pesos por persona por mes.

La ausencia de una respuesta contundente del gobierno se ve claramente reflejado en el deterioro del tejido social y productivo.

- A nivel social:

- **Aumento de la pobreza.** El ministro de trabajo, en entrevista con Búsqueda (25-feb), adelantó que la pobreza habría subido 4 puntos porcentuales en 2020, según estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto implica 140 mil personas más en situación de pobreza, un incremento de 45% respecto al año 2019.
- **La crisis ha tenido un impacto severo en la pobreza extrema.** Esto es particularmente visible en la capital del país en relación al aumento de las personas en situación de calle. Según un relevamiento realizado por el MIDES, sólo en Montevideo hay 940 personas más en situación de calle en relación al censo

realizado sólo 7 meses atrás: rápidamente se pasó de 2.500 a 3.440 personas en situación de calle en Montevideo. A nivel nacional en total son cerca de 4.000.

- **¿Era inevitable el aumento de la pobreza?** La ministra de Economía señaló en su reciente comparecencia a la Comisión Permanente del Parlamento que este aumento de la pobreza era “inevitable”. Nada más lejos de la realidad. Oportunamente, en mayo de 2020, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas estimó que, con una caída del PIB de 3,5%, se generaría un aumento de la pobreza de 3,1 puntos porcentuales. Al mismo tiempo señaló que para mantener la pobreza en los niveles previos a la pandemia se requería de un aumento de las transferencias destinadas hacia los sectores más vulnerables de aproximadamente 22 millones de dólares por mes (por lo que desarrollar esta política durante un año representaría un costo anual de 0,4% del PIB). Estas estimaciones han estado en línea con lo sucedido, considerando una caída del PIB mayor a la prevista en su momento. Aún en este marco, el costo transitorio de evitar una suba era perfectamente abordable para la economía uruguaya, con las fortalezas financieras que exhibe y que reconocen los mercados.
 - **Es una clara demostración de la ausencia de medidas contundentes de asistencia social:** se podría haber evitado que esos 140 mil compatriotas cayeran en la pobreza durante 2020. Este dramático aumento de la pobreza no sólo refleja las severas restricciones que están atravesando decenas de miles de familias, sino que también genera consecuencias negativas a mediano y largo plazo, que restringen las propias posibilidades de desarrollo económico y social de nuestro país: deserción escolar y menor rendimiento educativo, pérdidas o discontinuidades de acceso a salud, dificultades para una inserción dinámica en el mercado laboral y desmejoras generales en el bienestar. Esto solo refuerza la idea de que se debió dar una respuesta más contundente para evitar esta situación.
 - **Se repiten los errores cometidos en 2002, en relación a la inacción estatal frente a la crisis, con las experiencias de lo doloroso y difícil que será revertir el deterioro social.** Se trata de los mismos actores que están aplicando las mismas recetas que nos llevaron al fracaso. Con un agravante: hoy, a diferencia de lo que sucedía en 2002, Uruguay cuenta con espalda financiera (líneas de crédito contingente y fluido acceso al financiamiento en muy buenas condiciones) para dar una respuesta contundente a la emergencia social. Y, además, ello se da en un contexto en el cual el mundo tolera mayores déficits fiscales, con políticas expansivas a nivel global para evitar profundizar el impacto económico derivado de la pandemia y evitar el colapso social. El gobierno opta por el camino contrario, tolera el aumento de la pobreza con el objetivo de evitar un mayor déficit fiscal transitorio.
- **A nivel del tejido productivo:**
- **Insuficiencia total de las medidas de apoyo a las MiPyMes.** Esto se da en el marco de un alarmante cierre de empresas: durante la pandemia cerraron 10 mil MiPyMes, por la acotada espalda financiera con que cuentan y la fuerte afectación del mercado interno. Y ello sin duda profundiza los efectos negativos a nivel del empleo, que llevó a que durante 2020 se perdieran 60 mil puestos de trabajo. En

efecto, las empresas con hasta 20 ocupados representan la mitad del mercado de trabajo. Por ello resulta fundamental implementar medidas que permitan que estas micro y pequeñas empresas puedan seguir en actividad hasta que se superen los efectos de la pandemia.

- **Repliegue del Estado en la inversión pública**, tanto en el ámbito de la administración central como en el de las empresas públicas. La inversión pública, que en este contexto debería ser el factor dinamizador por excelencia, cayó fuertemente en el año 2020. Al respecto, la propia ministra de Economía informó que la inversión pública cayó en 2020 casi 8% en términos reales, siendo junto a las remuneraciones los componentes del gasto que más cayeron, en el marco de las medidas de ajuste fiscal adoptadas por el gobierno en plena pandemia.

4. Promesas incumplidas

- “Defender el poder de compra del salario” vs caída del salario real (2,4% entre enero de 2021 y enero de 2020), y se prevé una nueva caída en 2021 del poder de compra de los salarios y las jubilaciones).
- “Reducción de tarifas, prioritariamente las de combustibles y electricidad” vs aumentos generalizados (en algunos casos incluso por encima de la inflación del período y mucho más por encima de los salarios).
- “No aumentar la carga impositiva, tendiendo a mediano plazo hacia una disminución de impuestos” vs aumento de impuestos, a través de la rebaja de la devolución de IVA con medios electrónicos y el cambio en criterio de fijación de la BPC, con impacto en mayor recaudación de IRPF e IASS y en menores beneficios sociales. Asimismo, se creó un impuesto transitorio a empleados públicos y a pasivos de ingresos elevados y un incremento de impuestos a los consumidores a través del IMESI.
- Todos estos incumplimientos, además de confirmar el doble discurso electoral, sin duda generan un impacto negativo directo sobre el consumo y el ingreso de los sectores populares. Y todo esto se da mientras se procesan diversas exoneraciones sobre los sectores más poderosos, que implican una rebaja tributaria para las grandes empresas y los grandes propietarios de la tierra (con las modificaciones introducidas en el IRAE y el Impuesto al Patrimonio en la Ley de Presupuesto), y llamativamente otorgando beneficios retroactivos a extranjeros que fijaron su residencia fiscal en Uruguay.

5. Respuesta tardía e insuficiente del gobierno.

El gobierno subestimó la magnitud y duración de la crisis. Proyectaba una fuerte caída con una rápida recuperación, que arrojaba una caída promedio del PIB de -3.5%, lo que no se concretó. La caída terminará siendo cercana al 6%. Mientras Uruguay estaba en crisis, el Gobierno y su bancada parlamentaria estaban tramitando y aprobando el Presupuesto en

diciembre de 2020, incluyendo el ajuste de gastos y recorte de inversiones en todos los ministerios y empresas públicas.

Apenas votado el Presupuesto, los propios socios políticos de la Coalición -el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente- comenzaron a plantear y reclamar planes de reactivación económica y apoyo social, levantando propuestas que el FA había formulado en marzo del año pasado.

Aún asumiendo que se decidan medidas de apoyo y reactivación, se perdió un año, lo que tendrá consecuencias negativas de largo plazo sobre el tejido productivo y social de nuestro país.

El FA, en línea con lo planteado públicamente, comenzando desde marzo de 2020, y reiterando y adaptando desde entonces los planteos en línea con el agravamiento de la situación económica y social, declara la necesidad de un paquete de medidas y apoyos a los sectores sociales más vulnerables, a las MiPyMes y, también, el impulso a un conjunto de obras de infraestructura.

6. El eje de la conducción económica ha sido el ajuste fiscal y la promoción de los “malla oro” para el logro de un más que improbable derrame.

Se mantuvo el plan de recortes pre-pandemia: se dictó el decreto 90/020, dos días antes de la declaración de la emergencia sanitaria, que obligaba a hacer recortes generalizados y uniformes.

El ajuste de las cuentas públicas ha sido elevado, aún en plena pandemia y a contramano de lo que hacen prácticamente todos los gobiernos y aconsejan los organismos financieros y económicos internacionales.

La obsesión por el recorte fiscal es tan acentuada, que bastan dos ejemplos para dejarlo en evidencia. Por un lado, se asume como “evidente” el aumento más que sustantivo de la pobreza y, por otro, dándole la espalda al sistema científico que respondió magníficamente ante la convocatoria para combatir la pandemia, se dispone un fortísimo y escandaloso recorte de fondos de la ANII.

El espíritu que inspira las políticas de la Coalición pasa por la minimización del sector público, el enfoque “malla oro”-“derrame”, el postulado de la generación de espacios para los negocios de la élite privada, como método y solución para todos los problemas.

Se lleva adelante un proceso de gradual desmantelamiento y deterioro de las empresas públicas. En particular, en ANCAP y ANTEL, por la vía de la baja de la inversión y de un sistemático cambio de reglas de juego en favor de sus competidores privados, poderosas empresas multinacionales.

Al mismo tiempo, se promueven cambios normativos que debilitan los mecanismos de control y combate a la informalidad laboral y la evasión tributaria, se dan pasos atrás en la

transparencia en materia de las transacciones económicas y se promueven reglas que flexibilizan los controles sobre las inversiones de no residentes, a contramano de las tendencias internacionales.

En línea con una conducción política y una gestión que no valoriza el papel de la función pública, se verifica discrecionalidad en la gestión de los recursos humanos y la desarticulación de construcciones institucionales que apuntaban a una mejora de la gestión.

7. Los cambios en seguridad, vivienda, educación, trabajo y políticas sociales, desarrollados a lo largo del 2020, conllevan aspectos muy negativos.

- Seguridad:

- Los cambios en las políticas de seguridad reflejan un componente altamente represivo y criminalizador de la pobreza. Estos cambios implican la supresión de derechos, la vulneración de principios y garantías constitucionales, la restricción de las libertades y el incremento punitivista.
- Se introducen nuevas tipologías penales que no toman en cuenta el Derecho Penal en su conjunto y que tampoco parecen ser respaldados por la evidencia empírica, dado que estas nuevas tipologías no favorecen a la merma de los delitos, sino más bien lo contrario.
- Al mismo tiempo que se criminaliza la pobreza, se llevan adelante normas que favorecen el lavado de activos, con sus consecuentes repercusiones.
- El Ministerio del Interior sufre un recorte de 1.300 millones de pesos, de los cuales más de 1.000 millones proviene del rubro de remuneraciones. Es decir, que los funcionarios policiales experimentarán una caída salarial real muy fuerte a lo largo del 2021.

- Vivienda:

- Las políticas de vivienda llevadas adelante en este año de gobierno profundizan el déficit habitacional que vive el país. Las partidas asignadas al MVOT se recortaron en 2.100 millones de pesos, lo cual compromete seriamente la ejecución del Plan Quinquenal. De no mediar cambios en este sentido, se construirán 2.000 cooperativas menos que en el período anterior, y 1.500 viviendas menos en localidades pequeñas.
- Los programas destinados a las poblaciones vulnerables ven reducido su presupuesto notoriamente. Es así que el Programa de Mejoramiento de Barrios construirá 4.400 viviendas menos y el Plan Juntos 1.900 menos.

- A la vez, se lleva adelante una desregulación del mercado de alquileres, que habilita el desalojo express. Se trata de una norma que promociona un contrato abusivo y que desequilibra la relación entre propietario e inquilino a favor del primero.
- Se promueve la informalidad al no exigir control de tributos por parte del propietario para iniciar el proceso de desalojo y permite a la vez que una vivienda en condiciones ruinosas vuelva a alquilarse.
- Si se considera que una de las principales causas de la formación de asentamientos son los desalojos, entonces, hasta el momento, las políticas de vivienda llevadas adelante en este año, han contribuido a ello y también al aumento en la cantidad de personas en situación de calle, como se vio anteriormente.

- **Educación:**

- La educación se ha visto trastocada en este 2020 a causa de la pandemia, donde los avances producidos en los últimos 15 años permitieron continuar con las actividades educativas a través de diversas plataformas para evitar la dispersión del virus. Sin embargo, el cambio de visión por parte del gobierno y los recortes llevados adelante profundizan el problema y tendrán efectos más allá del corto plazo. La educación, la ciencia y la investigación han demostrado estar a la altura del combate a la pandemia y han sido pieza fundamental para el buen resultado sanitario experimentado por el país. Por ello, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación y rechazo al reciente recorte de recursos confirmado en la ANII.
- Asimismo, en la ANEP el recorte es de 2.700 millones de pesos, del cual 70% se explica por el rubro remuneraciones. Por lo que funcionarios y docentes del sistema educativo no solo trabajarán en peores condiciones, sino que además verán disminuido notoriamente su poder de compra de su salario.
- Este recorte ha llevado a que, por ejemplo, la infraestructura edilicia no esté asegurada para un nuevo comienzo de clases, el cual se desarrollará en comunidades educativas muy meneguadas. No existe claridad ni transparencia en torno a cómo se asignarán los nuevos locales, la improvisación y el desconcierto mostrado por el gobierno en este punto es alarmante.
- En una visión de mediano plazo, el gobierno tampoco prevé financiamiento para culminar la universalización educativa de los niños de tres años, para mantener el alcance de la modalidad de jornada completa para alumnos de los quintiles más bajos, o para continuar con la universalización del ciclo básico.
- La visión privatizadora y mercantilizadora del gobierno no hace más que profundizar las brechas entre los niños de quintiles de ingresos más ricos con los niños de quintiles de ingresos más pobres. Esto sin dudas, tiene repercusiones en el mediano plazo y contribuye de forma negativa al objetivo de igualdad de oportunidades.

- **Trabajo:**

- La falta de políticas activas en materia de empleo ha sido una constante a lo largo del primer año de gobierno. Hasta el momento, no ha habido políticas que apunten a la generación de empleos directos ni tampoco a mejorar su calidad. No se observa ningún apoyo a las más de 150 mil MiPyMes que emplean a más de 800 mil trabajadores.
- A la vez, se procesa un recorte en las políticas activas de empleo de más de 1.000 millones de pesos que dificultarán el accionar del MTSS y del INEFOP, instituciones fundamentales para lograr mayor formación en el trabajo y el cumplimiento de las normas laborales.
- Se han perdido 60 mil puestos de trabajo en el 2020 y las personas en seguro de desempleo ascendían a cerca de 80 mil al finalizar el año. Se requieren políticas enfocadas a la recuperación de los niveles de empleo, sin que el salario de los trabajadores sea la única variable de ajuste. De hecho, los anuncios para la próxima ronda de Negociación Colectiva son sumamente preocupantes. El gobierno insiste en que lo único por hacer es la baja del salario para recuperar el empleo, cuando la evidencia empírica señala que la baja del salario profundiza los daños de la crisis, mucho más en una economía pequeña y cuyas empresas locales dependen del poder de compra del mercado interno.

- Políticas Sociales:

- La falta de protección a los sectores más vulnerables, por medio del desmantelamiento de diversas políticas sociales es algo que notoriamente preocupa a nuestra fuerza política. El retroceso en el sistema de cuidados, la falta de respuesta a la problemática de las personas con discapacidad, el aumento sustancial de las personas en situación de calle, el recorte en el MIDES; el INAU y el INISA, que afecta particularmente a niños y jóvenes en condiciones extremas de vulnerabilidad, son una muestra de lo que hay que evitar como país y mucho más en una situación de crisis como la que estamos atravesando.
- Si bien se insiste por parte del gobierno en un aumento de la cobertura de las transferencias sociales, así como también del aumento en el monto de las mismas, entendemos que esto es totalmente insuficiente y clara muestra de ello, son los datos de pobreza y personas en situación de calle manifestados previamente.
- Al mismo tiempo que ocurre esto, se aumentó el sueldo de los jefes del MIDES, que pasó de 114 mil pesos mensuales a 166 mil pesos mensuales, lo que deja en claro la poca conciencia social y colectiva por parte del gobierno.

8. El futuro: la pandemia como excusa para jibarizar el Estado de Bienestar, recortar derechos e implementar un verdadero ajuste social frente a la

necesidad de gestionar los nuevos desafíos en clave de derechos y progreso.

A escala global la pandemia ha acelerado procesos de cambio en el plano productivo, en el mundo del trabajo y en las propias prácticas que asume la vida en sociedad, los que ya se estaban y están en curso de la mano de un acelerado cambio tecnológico.

Según cómo estos cambios se gestionan, pueden generar mayores niveles de precarización laboral, fragmentación social, exclusión y desigualdad o, por el contrario, de inclusión, progreso y mayor bienestar.

Lamentablemente, las líneas de acción desplegadas por el gobierno no permiten ser optimistas.

La ausencia de políticas productivas y laborales activas (o, al menos, de aquellas que no pasen por la exoneración de impuestos al barrer y la desregulación laboral, leit motiv del gobierno), la fragilización de las empresas públicas, el recorte de fondos para la educación en general, y para la innovación, el desarrollo y la investigación científica en particular, la obsesión por generar espacios de rentabilidad financiera de corto plazo para la élite privada, no permiten ser optimistas.

Tendencias globales con impacto nacional como la automatización y el despliegue de la economía digital, la transición energética, el desafío ambiental, junto con asuntos nacionales que deben ser enfrentados, como la reforma de la seguridad social y la inserción económica internacional, deben encararse sobre la base de grandes acuerdos nacionales, para los que el FA está dispuesto, lo que demostró en todo momento, llevando adelante un conjunto de propuestas económicas con el objetivo de mantener el bienestar de los hogares e intentar que los impactos de la crisis no recaigan sobre los sectores más vulnerables. Hasta el momento, dichas propuestas han sido dejadas de lado por el gobierno. Estamos expectantes ante los anuncios del Presidente. La política económica debe cambiar rotundamente, de lo contrario, la gran mayoría de la población enfrentará dificultades que se harán sentir mucho más allá del 2021.